

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARENTA Y SEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
SECCIÓN SEGUNDA¹

Bogotá D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veinte (2020)

EXPEDIENTE N°.: 11001-33-42-046-2019-00395-00²
DEMANDANTE: CARMELINA WILCHES GÓMEZ
**DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO Y OTROS**

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Revisado el expediente, se observa que, en atención a lo ordenado en el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020³, es posible proferir sentencia anticipada, toda vez que no existen pruebas por practicar y el asunto objeto de debate es de puro derecho.

Ahora bien, según lo dispuesto el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, dispuso que las excepciones previas se deben resolver como lo dispone en los artículos 100 a 102 del Código General del Proceso. Es decir que, cuando existan excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas las mismas deberán resolverse previo a la audiencia inicial. En caso contrario, el juez deberá decretar las pruebas en el auto que fija fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, siendo dicha audiencia la oportunidad para practicar las pruebas y decidir las excepciones.

En consecuencia, en primer lugar, el despacho procederá a pronunciarse respecto de las excepciones formuladas por las entidades demandadas.

¹ **Correos electrónicos:** jadmin46bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin46bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

² https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jadmin46bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eqw8A5LMcxdlrDkvWgsANxMBjPQki21nVJLDLzKhNmerPQ?e=MVUwpO

³ “Artículo 13. Sentencia anticipada en lo contencioso administrativo. El juzgador deberá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas. caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia se proferirá por escrito. (...)”

Revisado el expediente se observa que la apoderada del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la fiduciaria la Previsora S.A., propuso la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto de esta última. Igualmente, la Secretaría de Educación de Bogotá formuló las excepciones de falta de legitimidad en la causa por pasiva e ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

Así, el despacho procederá a resolver la excepción referida así:

Falta de legitimidad en la causa por pasiva

La legitimidad en la causa hace relación al interés sustancial que le asiste a un determinado sujeto procesal respecto de las pretensiones. Ello bajo el entendido que solo quien tenga interés en una pretensión tiene la potestad legal para acudir ante el juez ejercer el derecho de acción o de contradicción (defensa).

Sobre el particular, el Consejo de Estado, recientemente, recordó que

“La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”⁴, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las que la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones, sin perjuicio de que lo mismo se pueda resolver en el curso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, caso en el cual se impondrá la terminación del proceso, si la decisión cobija a todos los actores o demandados, según el caso.”⁵

Igualmente, la corte constitucional en sentencia C-965 de 2003, respecto de la legitimidad en la causa, señaló:

“En sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión de fondo, o en caso de que ello ocurra, la misma no puede resultar favorable a los intereses procesales de aquella. Conforme con el criterio básico que informa el instituto de la legitimación en la causa, en esa materia específica, la función legislativa está circunscrita a determinar qué sujetos se encuentran jurídicamente habilitados o autorizados para promover el proceso, para intervenir en él y para contradecir las pretensiones de la demanda; función que debe ejercer teniendo en cuenta la naturaleza de la actuación de que se trate y los fines o propósitos que con ella se persiguen.”

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

⁵ CE, SCA, S3, SS “C”, auto de 16 de octubre de 2020, radicación número: 11001-03-26-000-2014-00153-00(52445), Actor: COLGEMS LTDA. C.I., Demandado: Agencia Nacional de Minería y Servicio Geológico Colombiano.

De modo que, la legitimidad en la causa está relacionada con la titularidad del derecho que se pretende reclamar (interés sustancial) – legitimación por activa, y con la correspondencia que debe encontrarse en la parte pasiva, pues el derecho solamente puede reclamarse respecto de quien este facultado legal o contractualmente para ello.

Ahora bien, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por la Ley 91 de diciembre 29 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, por tanto, quien tiene la representación judicial del Fondo, es el Ministerio de Educación Nacional.

Igualmente, advierte el Despacho que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 91 de 1989, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá y pagará las prestaciones sociales del personal afiliado a este, por ello, al recaer el presente proceso sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria y teniendo en cuenta que las cesantías tienen la connotación de prestación social, es dicha entidad la que debe garantizar las condenas que se deriven del presente proceso.

En consecuencia, se tiene que la Fiduciaria La Previsora S.A., por ser la administradora de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene el deber contractual, emanado del contrato de fiducia celebrado entre dicha entidad fiduciaria y el Ministerio de Educación, de pagar las condenas que eventualmente puedan llegar a imponerse al Fondo, por tanto, su vinculación resulta no solo ajustada a derecho, sino necesaria.

Igualmente, se precisa que, si bien la Fiduciaria La Previsora S.A., no emitió el acto administrativo de reconocimiento del auxilio de cesantías, respecto del cual se pretende el pago de la sanción moratoria; cierto es que dicha entidad era la encargada de realizar el respectivo pago, pues se reitera, que en su calidad de fiduciaria, es la encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; por tanto, es posible que la mora en el pago de las cesantías le sea atribuible.

En virtud de lo expuesto, la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva propuesta por la Fiduciaria la previsora no tiene vocación de prosperidad, y por ello, deberá declararse no probada.

De otro lado se precisa que, si bien el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es la entidad encargada de emitir los actos administrativos relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cierto es que en todo caso las entidades territoriales, como lo es la Secretaría de Educación, actúan en nombre y representación del Fondo, por ende, es dicha entidad, a través del Ministerio de Educación, la facultada para asumir la defensa judicial de los actos administrativos que en su nombre expidan las entidades territoriales.

De lo anterior, se colige que la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva propuesta por el Distrito Capital de Bogotá está llamada a prosperar, pues, se reitera, es el Ministerio de Educación Nacional quién en el presente asunto está legitimado por pasiva. Así, el despacho se abstendrá de pronunciarse respecto de las demás excepciones propuestas por dicha entidad.

Así las cosas, a pesar de haberse encontrado acreditada la excepción de falta de legitimidad por pasiva propuesta por la apoderado de la Secretaría de Educación de Bogotá, no es hay lugar a la terminación del proceso; por tanto, ha de continuarse con el trámite procesal correspondiente respecto de las partes que continúan vinculadas, es decir, habrá de procederse al decreto de pruebas, y dado que no hay pruebas por practicar, a continuación a de correrse traslado a las partes para alegar de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá D.C. – Sección Segunda,

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva formulada por la fiduciaria la Previsora S.A.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva, formulada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

TERCERO: Se decretan como pruebas documentales, con el valor que les corresponda, las acompañadas con la demanda y las contestaciones a la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 245 y 246 del C.G.P.

CUARTO: Se dispone correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días contados a partir de la notificación por estado de la presente providencia, para que presenten sus alegatos de conclusión por escrito.

Una vez vencido el término anterior, por Secretaría ingrésese el expediente al despacho para proferir sentencia.

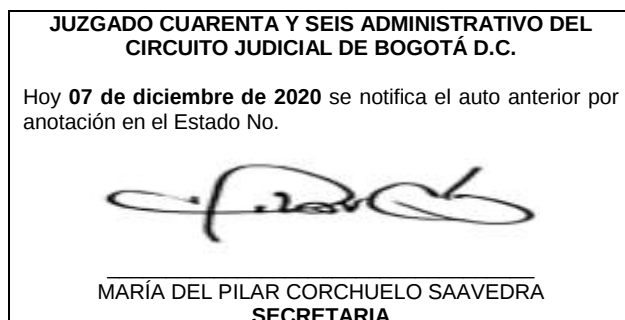
QUINTO: Para efectos de tener por contestada la demanda, respecto de la Secretaría de Educación de Bogotá, se reconoce personería adjetiva al abogado Manuel Arturo Rodríguez Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.165.244, y tarjeta profesional No. 300.495 del C. S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos y para los efectos del memorial poder allegado al plenario.

En consecuencia, se le reconoce personería adjetiva al abogado David Felipe Morales Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.455.012, y tarjeta profesional No. 307.316 del C. S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la Secretaría de Educación de Bogotá, en los términos y para los efectos del memorial de sustitución de poder allegado al plenario.

Igualmente, se reconoce personería adjetiva a la abogada Ángela Viviana Molina Murillo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.103.946, y tarjeta profesional No. 295.622 del C. S. de la J., para actuar como apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – y la Fiduciaria la Previsora S.A., en los términos y para los efectos del sustitución de poder allegado al plenario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELKIN ALONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Juez



EXPEDIENTE N°: 11001-33-42-046-2019-00395-00
DEMANDANTE: CARMELINA WILCHES GÓMEZ
DEMANDADO: FOMAG Y OTROS

Firmado Por:

ELKIN ALONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 046 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE
DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8cf5384614258c9bf437897bb638775df55fbaf0641f840a0692e568a00a02cf**
Documento generado en 04/12/2020 09:17:18 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>